

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO CUARENTA Y CINCO CIVIL DEL CIRCUITO**  
**DE BOGOTÁ D.C.**

**[j45cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j45cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co)**

Bogotá D.C., agosto doce de dos mil veintiuno

**Rad:** 11001310304520210041600  
**Accionante:** MAGDA ISELA LOSADA BARRERA  
**Accionada:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA  
PROSPERIDAD SOCIAL

Procede el despacho a resolver la acción de tutela de la referencia, previo el estudio de los siguientes,

### **I. ANTECEDENTES**

Como soporte fáctico de su solicitud, en síntesis, indica la señora Magda Isela Losada Barrera, que el 23 de junio de 2021 (según anexo), elevó ante la entidad accionada, derecho de petición solicitando información acerca del programa Proyecto Productivo – Generación de Ingresos MI NEGOCIO- y si le hace falta alguna documentación para ser beneficiario del mismo y, hasta la fecha de presentación de la acción, no ha obtenido respuesta alguna.

Por consiguiente, solicita se le ampare su derecho fundamental de petición, ordenándole a la entidad accionada se le dé información de cuándo se le va a entregar el proyecto productivo como lo establece la Ley 1448 de 2011, se le informe si le hace falta algún documento para acceder al mismo y en caso de no adjudicar en dinero se le entregue en especie y en general, se le dé una fecha cierta de cuándo se le va a hacer entrega de ese beneficio.

## **II. ACTUACIÓN PROCESAL**

1. Asumido el conocimiento de la acción por parte de esta Oficina Judicial se envió comunicación a la entidad accionada, para que ejerciera el derecho de defensa y se pronunciará sobre los hechos base de esta acción y envíe a este estrado judicial copia de los documentos que guarden relación con la petición, acompañado de un informe detallado sobre los hechos de la presente acción.

2. En tiempo, la accionada solicitó se niegue el amparo deprecado por la accionante ya que ese Departamento no incurrió en actuación u omisión que genere amenaza alguna o vulneración a los derechos fundamentales de la accionante como quiera que la entidad emitió respuesta resolviendo oportunamente de fondo y con claridad la petición elevada en la cual se resuelven todos los interrogantes propuestos, decisión que le fue notificada al correo electrónico que suministró la actora, por lo que se configuró un hecho superado.

Además, efectuó unas precisiones sobre el componente de estabilización socioeconómica de la población víctima, destacando que Prosperidad Social no es la única alternativa con que cuenta la accionante, a las cuales puede acudir en aras de encontrar un programa que se ajuste a sus necesidades dentro de la Oferta Institucional de cada una de las entidades, pues dicha oferta de programas también depende de una focalización del gasto público, que depende del presupuesto asignado y condiciones de operatividad de cada programa.

## **III. CONSIDERACIONES**

1. Acorde con la Constitución Política, el Estado Colombiano está instituido bajo un sistema social de derecho, lo cual implica que la organización del mismo debe estar sujeta a una serie de principios y reglas procesales que se encargan de crear y perfeccionar todo el ordenamiento jurídico; de esa manera, se limita y se controla el poder estatal con el fin de que los derechos del individuo se protejan y se realicen a partir de lo dispuesto en la propia Ley.

1.1. De esa forma, se establecen pues los principios y derechos constitucionales que irradian a todo el ordenamiento jurídico su espíritu garantista, que busca como fines últimos la protección y realización del individuo en el marco del Estado al que se encuentra asociado. Precisamente, uno de los mecanismos destinados a buscar la materialización de los principios que componen el Estado Social de Derecho, es la acción de tutela consagrada por el artículo 86 de la Carta Magna como el instrumento idóneo para que toda

persona logre la garantía y protección de sus derechos fundamentales cuando estos hayan sido vulnerados o sean amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular.

1.2. La finalidad última de este procedimiento especial es lograr que el Estado, a través de un pronunciamiento judicial, restablezca el derecho fundamental conculcado o impida que la amenaza que sobre él se cierne se llegue a configurar.

2. Verifiquemos en primer término los presupuestos de la acción:

2.1. Como la acción objeto de pronunciamiento puede ser formulada por cualquier persona que considere vulnerados sus derechos fundamentales, como precisamente aquí ocurre con la señora Magda Isela Losada Barrera quien instauró la acción directamente por ser quien presentó la petición ante la accionada, resulta acreditada la legitimación en la causa por activa.

2.2. Por su parte, la accionada se encuentra legitimada en la causa por pasiva por cuanto la misma es viable dirigirse contra toda autoridad pública condición que ostenta el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DAPS, de manera que está legitimada para resistir esta acción.

2.3. La eficacia de la acción de tutela como medio de amparo superior halla su origen en la aplicación del principio de la inmediatez, presupuesto de procedencia, dado que el objetivo primordial de tal instrumento se encuentra en la protección actual, inmediata y efectiva de los derechos fundamentales. Bajo ese escenario, la jurisprudencia constitucional ha establecido que, siendo el elemento de la inmediatez ineludible obligación, la acción de tutela y su ejercicio deba ser oportuno y razonable, presupuesto que aquí se cumple dado que la petición erigida por la actora consistente en que se le dé información acerca del programa Proyecto Productivo –Generación de Ingresos MI NEGOCIO- y si le hace falta alguna documentación para ser beneficiario del mismo por ser víctima del desplazamiento forzado la cual presentó el 23 de junio de la presente anualidad.

2.4. De otra parte, ha de resaltarse el carácter residual y subsidiario de esta acción, dado que el aparato judicial prevé diversos mecanismos de defensa ordinarios a los que pueden acudir las personas para la protección de sus derechos; en este sentido, el juez de tutela debe observar cada caso concreto y determinar la existencia o no de otro medio judicial que sea idóneo para proteger el derecho amenazado.

En el asunto objeto de análisis, la demandante acude a la acción constitucional para reclamar, conforme lo suplicó en las peticiones, que se le protejan el derecho fundamental de petición, y se le ordene a la accionada Departamento Administrativo para la Prosperidad Social proceda a pronunciarse de fondo sobre la petición de que se le diga una fecha cierta de cuándo se le va a reconocer lo concerniente al programa Proyecto Productivo – Generación de Ingresos MI NEGOCIO- y si le hace falta alguna documentación para ser beneficiaria del mismo y pagar la indemnización a la que considera tener derecho por ser víctima del desplazamiento forzado, pedimento frente al cual el ordenamiento jurídico no cuenta con un procedimiento eficaz e idóneo, de donde resulta forzoso concluir que para el caso se cumple con el presupuesto de la subsidiariedad.

3. Conforme a lo expuesto queda claro que la accionante solicita el amparo de su derecho fundamental de petición el cual considera vulnerado con el proceder de la accionada ya que no se ha pronunciado de fondo en cuanto a lo por ella reclamado respecto a que se le dé una fecha cierta para el reconocimiento del Proyecto Productivo MI NEGOCIO, situación que se encuentra latente por definir y de ahí que estime la vulneración de ese derecho.

3.1 El derecho fundamental de petición, concebido en el artículo 23 de la Constitución Política, dispone que “[t]oda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.”.

3.2. A su turno, la Ley 1755 del 30 de junio de 2015 “POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN Y SE SUSTITUYE UN TÍTULO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”, en su artículo 14, señaló que “[s]alvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción (...)”. Sin embargo, en el párrafo de la mentada regla se establece una excepción, la cual consiste en que, si eventualmente no es posible dar respuesta a la petición en dicho lapso, se informará tal circunstancia al interesado con exposición de los motivos y el plazo en que será resuelta, el cual no podrá ser mayor al doble del tiempo establecido inicialmente, sin perjuicio de lo que establezcan las leyes especiales.

3.3. En sentencia T-293 de 2015 la Corte Constitucional determinó “(...) que este derecho comporta las siguientes obligaciones correlativas para la autoridad que recibe la solicitud: (i) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (ii) la respuesta debe producirse dentro del plazo legalmente establecido y en caso de vacío normativo, dentro de un plazo razonable, que debe ser lo más corto posible;<sup>1</sup> (iii) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado; (iv) la falta de

---

<sup>1</sup> Sentencia T-481 de 1992; M.P. Jaime Sanín Greiffenstein.

competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder;<sup>2</sup> y (v) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado.<sup>3</sup>

4. Descendiendo al caso sub-examine, se tiene que la accionante manifestó en el escrito de tutela que el día 23 de junio de 2021 solicitó ante la autoridad accionada, se le diera información acerca del programa Proyecto Productivo –Generación de Ingresos MI NEGOCIO- y si le hace falta alguna documentación para ser beneficiario del mismo, frente a lo cual el Departamento para la Prosperidad Social señaló que emitió respuesta resolviendo oportunamente de fondo y con claridad la petición elevada en la cual se resuelven todos los interrogantes propuestos, decisión que le fue notificada al correo electrónico que suministró la actora, por lo que se configuró un hecho superado, por lo que solicita se niegue el amparo constitucional deprecado.

Destacó que en esa comunicación se le informó que Prosperidad Social, enmarca el desarrollo de sus intervenciones en una focalización territorial, más no de familias o personas de manera individual, ya que busca generar un impacto considerable, que sus esquemas son especiales de acompañamiento de carácter temporal orientados a contribuir a la estabilización socioeconómica lo cual se hace en coordinación con la UARIV, le informó que cuenta con cuatro grupos de trabajo misionero que responden a cuatro estrategias de intervención y sus rutas se ciñen a esos modelo metodológicos; le informó la forma de vinculación a la oferta de programas, la forma de llevarlo a cabo y los requisitos.

4.1. Contrastadas la petición y la respuesta, para el juzgado fluye que, en verdad, esta última atiende todas las inquietudes planteadas por la accionante en su petición y resulta clara y congruente con lo solicitado, de tal suerte que colma todas las garantías que comprende la prerrogativa de petición que contempla el artículo 23 Constitucional, pues claramente se le notificó la respuesta a la dirección por ella registrada donde se le informó que no hay en el momento convocatoria para acceder al beneficio que demandó la accionante denominado Proyecto productivo MI NEGOCIO y se le informó sobre el procedimiento para reconocimiento de ese beneficio y, que debía estar atenta a las comunicaciones que publique la accionada entorno a ella, momento en el que deberá presentar la documentación respetiva.

4.2. Así las cosas, queda claro para el despacho que con el proceder de la pasiva en este asunto, se logra establecer que en el

---

<sup>2</sup> Sentencia T-219 de 2001, M.P. Fabio Morón Díaz.

<sup>3</sup> Sentencia T-249 de 2001; M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

presente asunto se configuró el hecho superado, sobre el cual la jurisprudencia constitucional ha sostenido:

“(…) cuando durante el trámite de la acción de tutela o de su revisión en esta Corte, sobreviene la ocurrencia de hechos que demuestren que la vulneración de los derechos fundamentales, en principio informada a través de la instauración de la acción de tutela, ha dejado de ocurrir.<sup>4</sup> En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional ha enumerado algunos requisitos que se deben examinar en cada caso concreto, con el fin de confirmar si efectivamente se está frente a la existencia de un hecho superado, a saber: 1. Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se carezca de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del accionante o de aquél en cuyo favor se actúa. **2. Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado.** 3. Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de una prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se puede considerar que existe un hecho superado.”<sup>5</sup> (Subrayado y Negrilla fuera del texto original).

A su turno, en Sentencia de Unificación 540 de 2007 dicha Corporación expresó que, “[e]n efecto, si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes de proferirse el fallo, con lo cual la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío”.

4.3. Memórese en este punto que la prerrogativa constitucional de petición se satisface con la emisión de una respuesta que atienda todos los pedimentos de manera clara y directa, sin evasivas, sin que ello implique, per se, una respuesta favorable a las aspiraciones del solicitante, punto de vista desde el cual se evidencia que la contestación emanada por la pasiva en este asunto cuenta con las mentadas características para tenersele como suficiente y respetuosa del derecho constitucional en comento.

4.4. Así las cosas, al estructurarse el hecho superado en el presente trámite, conlleva a que el amparo constitucional sea negado y así se dispondrá en la resolutive del presente fallo.

En virtud de los argumentos expuestos, el **JUZGADO CUARENTA Y CINCO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.**, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

---

4 Al respecto se pueden consultar las sentencias T-307 de 1999 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-488 de 2005 M.P. Álvaro Tafur Gálvis, T-630 de 2005 Manuel José Cepeda, entre muchas otras.

5 Sentencia T-045 de 2008.

## V. RESUELVE:

**PRIMERO: NEGAR** la acción de tutela instaurada por MAGDA ISELA LOSADA BARRERA contra el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, por hecho superado.

**SEGUNDO: NOTIFICAR** esta decisión por el medio más expedito a las partes. Déjese la constancia de rigor.

**TERCERO: ENVIAR** el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en el evento de no ser impugnada. Déjense las constancias pertinentes.

## NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

  
GLORIA CECILIA RAMOS MURCIA  
Jueza